

CAPÍTULO 3

LA AFIRMACIÓN DE LOS TRABAJADORES COMO CLASE: SOCIEDADES DE RESISTENCIA, PROTESTA E INCIPIENTE AVANCE DEL ESTADO EN MATERIA LABORAL, 1904-1930

Florencia Gutiérrez

1. Presentación

En el periodo comprendido entre 1904 y 1930, los trabajadores tucumanos articularon un denso entramado de asociaciones que transitó del mutualismo a las sociedades de resistencia y fue liderado, principalmente, por anarquistas y socialistas. La organización de los trabajadores se conjugó con diversas formas de acción colectiva cuya expresión más contundente fue la declaración de huelgas, estrategia de lucha que dio visibilidad a sus reivindicaciones y les permitió conquistar mejores condiciones de trabajo. Las huelgas azucareras, al paralizar la actividad económica más importante de la provincia y la que concentraba mayor cantidad de mano de obra, concitaron gran impacto y resonancia pública. Ahora bien, el avance de la organización laboral, en estrecha asociación con las expresiones de protesta y la preocupación gubernamental por la cuestión obrera, alentó el tibio avance de la legislación social y la creación de instituciones que, como el Departamento Provincial de Trabajo (1917), procuraron canalizar las demandas obreras, fomentar espacios de negociación y atenuar la conflictividad.¹

2. El mundo del trabajo tucumano a principios del siglo XX

Como se analizó en el capítulo anterior, en el último cuarto del siglo XIX, la intensificación del cultivo e industrialización de la caña de azúcar promovió la emergencia de un modelo productivo que transformó sustancialmente el mundo del trabajo tucumano. La demanda de mano de obra, especialmente en la época de zafra (entre mayo y octubre, aproximadamente), alentó la implementación de un conjunto de componentes coactivos (leyes contra la “vagancia”, papeleta de conchabo y peonaje por deudas) destinados retener y disciplinar la fuerza de trabajo. En 1896, la crisis y cuestionamiento de este

¹ Este capítulo recupera, principalmente, las investigaciones de María Celia Bravo, Daniel Campi, Alejandra Landaburu y Vanesa Teitelbaum.

sistema normativo derivó en la abolición de ley de conchabo y habilitó el irrefrenable avance de un mercado de trabajo libre y unificado, rasgo definitorio del capitalismo (Campi, 2000, p. 92).

La composición y dinámica del universo laboral azucarero fue modelada por el ritmo periódico de la zafra, es decir, por la estacionalidad de las labores y la complementariedad de las tareas de fábrica y de surco, propias de la condición agroindustrial. En tal sentido, el conjunto obrero se escindió en dos: los obreros permanentes, ya fuera que trabajaran en la fábrica o en el surco, y los temporarios, trabajadores golondrinas que llegaban para la época de la zafra. Entre 1880 y 1895, las 37 fábricas azucareras existentes en la provincia ocuparon un total de 27.607 obreros, entre los temporarios y los permanentes; en 1914 en los 27 ingenios de la provincia laboraron un total de 23.303 trabajadores: 14.229 eran temporarios y 8.418 permanentes. Esta disparidad numérica y el contraste de las condiciones laborales fue uno de los rasgos del mundo azucarero, en tanto los temporarios fueron el segmento numéricamente más importante y también el más vulnerable, el que soportó las peores condiciones de trabajo. En el extremo superior de la pirámide laboral se ubicaban los empelados jerárquicos, técnicos y administrativos, quienes actuaban como agentes patronales encargados de controlar los procesos de trabajo y pautar los ritmos productivos. El crecimiento del personal técnico en los ingenios expresó la complejización del proceso de producción, las 223 personas contabilizadas en 1895 para manejar la moderna maquinaria ascendieron a 656 en 1914 (Bravo, 1989, p.92).

Una de las particularidades del universo agroindustrial fue la mayoritaria contratación de mano de obra masculina, que en 1914 representaba el 92% de la fuerza empleada en los ingenios. Por su parte, el trabajo de los niños constituía el 6,7% y el 1,3% correspondía a las mujeres, quienes cosían las bolsas de arpillera en las que se envasaba el dulce (Bravo, 1989, p.82). La habilidad manual de éstas fue una cualidad valorizada a la hora de su contratación en diversas industrias, entre ellas la azucarera, pues se subrayaba que las mujeres eran débiles para realizar otras tareas y, además, carecían de los conocimientos necesarios (Lobato, 2000, p. 106).

Asimismo, es posible pensar que esta inserción productiva se vivenciara como una prolongación o extensión de las tareas realizadas por ellas en sus

hogares y fuera aceptada por no cuestionar la tradicional división del trabajo que les confiaba la realización de las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Fuera de la fábrica, las mujeres o hijas de los obreros contribuían de diversas formas con la economía familiar: realizaban tareas en el *chalet* de los propietarios, las casas del personal jerárquico o las oficinas de la administración; preparaban y vendían comida; lavaban y planchaban la ropa de los empleados solteros. Respecto del trabajo infantil en las fábricas, el diputado socialista Mario Bravo señalaba que “un niño de diez o doce años puede hacer ciertos trabajos con igual resultado que un hombre de 30, mientras que su salario escasamente es la mitad del que aquel percibe” (Bravo, 1927, p. 207). Sin duda, las necesidades económicas del hogar obrero alentaron la inserción laboral de los niños en los ingenios, cuya presencia numérica fue más importante que la fuerza de trabajo femenina.

En la esfera agrícola las cuestiones de género reportaron otras particularidades. Durante la zafra, la afluencia de trabajadores temporales oriundos de las provincias vecinas, particularmente de Santiago del Estero y Catamarca, constituyó el signo distintivo de la actividad azucarera. Los cosecheros arribaban en tren o en carros acompañados de sus mujeres e hijos. Para los peones temporales la paga era a destajo, es decir, por cantidad de caña hachada, pelada y cargada en la zorra o el carro. Si bien el contrato laboral se realizaba con el varón de la familia, las mujeres y los niños colaboraban activamente en las tareas agrícolas. Sin embargo, la participación de estos actores era invisibilizada por el contrato laboral que acentuaba la subordinación “respecto del padre, marido, compañero o hermano” (Campi y Bravo, 1995, p. 155). De esta forma, la exclusión contractual de la mujer en la esfera rural profundizó las formas de dominación masculina en los hogares campesinos y reforzó la dependencia de las mujeres de la figura del varón proveedor que, por lo general, era su pareja.

Como señalamos en el capítulo anterior, los obreros permanentes y temporarios, las condiciones de vida y de trabajo diferían sustancialmente. Durante la cosecha, las jornadas laborales diurnas o nocturnas oscilaban entre las 10 y 12 horas, “aunque a fines de la década de 1910 algunos ingenios tucumanos decidieron adoptar la de ocho horas, modalidad que se generalizó a partir de una ley provincial de 1923” (Campi, 2009, p. 261). A pesar de que en

1907 se promulgó la ley de descanso dominical, ésta no incluyó a muchos trabajadores, entre ellos los azucareros. Como señalamos, en términos salariales, los obreros temporarios cobraban a destajo; los permanentes percibían un salario que combinaba el pago en metálico con la denominada ración (consistente en carne, maíz, sal y a veces leña) y el vale, moneda privada emitida por las empresas, que el obrero utilizaba para comprar productos de primera necesidad en la proveeduría del ingenio, situación que generaba abusos que mermaban el ingreso de la familia obrera. Si bien una de las conquistas de la huelga de 1904 fue la abolición del vale, y por ende, el fin de la sujeción del trabajador a la proveeduría, pasaron muchas décadas para que su extinción fuera definitiva.

Por su parte, “el salario real del peón azucarero tucumano se mantuvo en todo momento por debajo del salario real del obrero industrial de Buenos Aires”, en diversas coyunturas, entre 1881 y 1927, los ingresos reales del obrero tucumano equivalían, aproximadamente, al 50 por ciento de los ingresos del obrero de Buenos Aires. Sin embargo, entre 1916 y 1927, es posible constatar un progresivo aumento de los ingresos reales de los peones azucareros (ver Tabla N° 11 en Anexo). Probablemente, la mayor integración del mercado de trabajo a escala nacional, el avance de la organización y protesta obrera y la mayor sensibilidad del gobierno radical a las demandas socio-laborales, particularmente las leyes obreras de 1923, incidieron en este crecimiento salarial (Correa Deza y Campi, 2009, pp.9-14).

En lo que respecta al sector secundario, la industria azucarera contribuyó decisivamente al desarrollo de la actividad metalúrgica, especialmente orientada a la reparación de piezas y maquinarias de baja complejidad. A comienzos del siglo XX, “surgieron una serie de talleres con rasgos modernos y personal capacitado para encarar el proceso de “adaptación” de tecnología, a través de la copia e innovación local” y durante el periodo de entreguerras la metalurgia local se consolidó como “auxiliar” de la agroindustria. Esta actividad “se caracterizó por establecimientos capacitados para ocupar todas las fases de la metalmecánica, consistente en la confección de piezas y repuestos indispensables, hasta la reparación de partes de equipos industriales”. (Moyano, 2013, p. 102).

La llegada del ferrocarril fue otro de los motores que aceleró la transformación socio-económica de la provincia. A fines del siglo XIX, el aumento del tráfico del Ferrocarril Central Norte y el proyecto de extender internacionalmente el trazado férreo para llegar a Bolivia impulsaron la construcción de un importante taller ferroviario que, en reemplazo del existente en la capital tucumana, se encargaría del mantenimiento y reparación de las locomotoras y el material rodante. El taller comenzó a construirse en 1902 en Tafí Viejo y en 1912 empezó a funcionar a pleno. Los procesos de adaptación y desarrollo tecnológico, los ensayos de organización científica del trabajo, la especialización y división de tareas en los diversos departamentos y la conformación de una importante comunidad laboral en torno al taller redimensionaron el universo laboral tucumano de principios del siglo XX. En 1922 un artículo periodístico señalaba que al franquear las puertas de los inmensos talleres podía leerse en una pizarra que el número de operarios sumaban 2.600 hombres, quienes con su labor fabricaban “una locomotora y un coche diarios y un vagón por hora”. La reseña también subrayaba la construcción de un pueblo obrero en las inmediaciones del taller “compuesto por pulcras y alegres casitas de dos o más habitaciones”, que contribuía al abaratamiento de la vida del trabajador, y se complementaba con la instalación de un comedor para 600 personas “donde los que allí no viven pueden procurarse un alimento variado, sano y abundante, por un ínfima erogación”.²

Los talleres de Tafí Viejo fueron pioneros en la introducción de los principios de organización científica del trabajo en Tucumán. En este sentido, en los años veinte, la creciente concentración de autoridad en la figura de los técnicos y el personal especialmente capacitado, quienes establecían las cuotas de producción y supervisaban los procesos de trabajo; la detallada división de tareas en las distintas secciones del taller y la aplicación de un método laboral sustentado en el perfeccionamiento del incentivo salarial revolucionaron la organización de los talleres. Estas estrategias se proponían lograr una más eficiente capacidad de producción, a la vez que incentivaban el esfuerzo personal del trabajador en procura de un mejor salario (Palermo,

² *Riel y Fomento*, diciembre de 1922, pp.94-95. Agradezco a Silvana Palermo por facilitarme éste y otros materiales periodísticos.

2015, pp.61-62). En tal sentido, los talleres fueron un espacio donde tempranamente se ensayó la racionalización de la organización del trabajo.

La producción textil también fue importante en la provincia. En 1895, sastres y modistas sumaban un total de 10.889 trabajadores, cifra que en 1914 ascendió a 18.586. Gran parte de este contingente laboral estaba compuesto por mujeres, cuyas posibilidades de vincularse con el mercado de trabajo eran restringidas, destacándose su mayoritaria inserción como costureras, lavanderas, planchadoras y cigarreras. Estos oficios engrosaban el denominado trabajo a domicilio, es decir, el que desempeñaban las mujeres por cuenta de un patrón pero en sus hogares. En 1904, el médico catalán Juan Bialeto Massé definió el trabajo de las costureras tucumanas como una labor ruda y mal recompensada y atribuía esa situación “porque en vez de ser para ellas título de galardón, un falso prejuicio social les hace ocultar tan verdadero mérito”. Estimaba que una costurera “ordinaria” ganaba entre 80 centavos y 1 peso y las que cosían camisas finas alcanzaban a cobrar, en el mejor de los casos, 2 pesos, mientras que una ración de comida implicaba una erogación de 2,64 pesos.³ Desde fines del siglo XIX, y sobre todo en la primera década del XX, “el número de costureras aumentó asociado a la demanda local pero el oficio sufrió una disminución salarial pues los precios de las prendas bajaron para resistir la competencia de las que llegaban desde el litoral” (Lobato, 2007, p. 44).

En lo que respecta al sector terciario, hacia 1914 aumentaron las ocupaciones vinculadas con el transporte, la expansión del Estado y, en menor medida, las profesiones liberales. Sin embargo, este crecimiento no generó modificaciones sustanciales en la composición del sector, “cuyos pilares continuaron siendo como en 1869 la actividad mercantil y el servicio doméstico”. En lo que hace a este último rubro, en 1914 se contabilizaron 22.815 personas, quienes en un 77,5% eran mujeres. Por su parte, las lavanderas representaban casi el 38% del total de personas ocupadas en el servicio doméstico, mientras que los cocineros y cocineras alcanzaban el 18% y las sirvientas el 13% (Bravo, 1989, pp. 93-95). Un común denominador del servicio doméstico fue su postergación en términos de derechos laborales: la

³ Juan Bialeto Massé, *Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas*, 2010, vol. 1, p. 175.

ausencia de una legislación tendiente a proteger a estas trabajadoras fue una constante.

Por su parte, el crecimiento de los empleados en el transporte y las comunicaciones (trabajadores ferroviarios, telegrafistas, telefonistas, guarda-tranvías, *chauffeurs*) expresaron el proceso de modernización que atravesó a la provincia a comienzos del siglo XX. Sin embargo, a pesar de esta expansión ocupacional, en el sector terciario su incidencia no fue significativa, dado que en 1895 representaban el 4% y en 1914 la cifra apenas trepó al 5%. Por su parte, en 1914 los empleados públicos constituyeron el 2,6% del total del sector terciario, al tiempo que se evidenció un crecimiento de los maestros y profesores, quienes pasaron de un 0,6% en 1869 a un 3,2% en 1914, reportando una abrumadora mayoría de mujeres (84%). En Tucumán, como en el resto del país, “la enseñanza se abrió como posibilidad para que las mujeres ingresaran al mundo del trabajo cuando se dio forma al aparato educativo estatal y se afianzaron ciertas nociones sobre los papeles femeninos y masculinos en la sociedad”. En este contexto, las maestras encarnaban el don del cuidado y la protección tradicionalmente atribuido a las mujeres (Lobato, 2007, pp.63-67).

Por último, cabe precisar que en 1914 el número de jornaleros y peones sin ocupación específica sumó un total de 50.429, lo que representó el 50% del mercado de trabajo masculino de Tucumán. Este alto porcentaje revela la gran demanda de mano de obra de la industria azucarera, particularmente durante la época de la zafra, es decir, durante los cuatro meses en que la cosecha de la caña requería de ingente cantidad de brazos. Este grupo que antes del despegue azucarero, específicamente en 1869, representaba el 12,5% en 1914 trepó a un 32% (Bravo, 1989, p. 97).

Los actores de este heterogéneo mundo laboral articularon formas de organización y de protesta para intentar mejorar sus condiciones socio-laborales. Las experiencias fueron múltiples, como diversa era la realidad social de los trabajadores tucumanos. En tal sentido, la dificultad de los obreros agroindustriales para organizarse y declarar huelgas no puede desconocer el control que ejercían los empresarios en los pueblos azucareros y su histórica resistencia a la agremiación y al avance del Estado en materia laboral. La vulnerabilidad del trabajo temporario, no sólo el azucarero, sino de todo aquel

sujeto a la estacionalidad de la demanda fue un factor que dificultó la organización y la canalización del descontento. Como contrapunto, los trabajadores urbanos, particularmente los de la ciudad capital, más cercanos y permeables a la influencia del socialismo y anarquismo, fueron los primeros en asociarse y liderar la protesta social. Las mujeres, quienes mayoritariamente se dedicaban al servicio doméstico o realizaban trabajo a domicilio, tuvieron más dificultades para agruparse y demandar. La dispersión, la falta de vínculos entre ellas, la imposibilidad de organizarse, propia del trabajo desempeñado, obstaculizaron la articulación de demandas y, por ende, postergaron el mejoramiento de sus condiciones laborales.

3. La organización de los trabajadores: del mutualismo a las sociedades de resistencia

Como analizamos en el capítulo anterior, un rasgo del universo laboral urbano del último cuarto del siglo XIX fue la multiplicación de sociedades mutualistas nacidas al calor de las necesidades y apremios de los trabajadores. Estas sociedades prohibían tajantemente que en su seno se discutiera de política. Esta proscripción, destinada a evitar pujas entre los socios, suponía concebir a la política como una actividad que, atravesada por el conflicto, sólo podía generar divisiones y tensiones. La imposibilidad del mutualismo de actuar políticamente procuró ser compensada a través de su activa participación en las fiestas patrias. En este sentido, la presencia en los festejos cívicos, la inauguración de monumentos o los aniversarios de instituciones relevantes se convirtieron en espacios clave que otorgaron visibilidad pública a las sociedades mutualistas. Como en otras latitudes, la fiesta cívica contribuyó a la representación e integración pública de los trabajadores como actores colectivos, fue la instancia donde la sociabilidad laboral alcanzó un lugar en el espacio simbólico republicano (Illades, 2012, pp.47-48).

Ahora bien, la peculiaridad del mutualismo, donde patrones y trabajadores podían confluír en un mismo espacio destinado al auxilio, fue criticada por dirigentes y militantes anarquistas y socialistas, quienes consideraban que esta convergencia restaba eficacia a las demandas, protestas y conquistas sociales de los trabajadores. Sin embargo, como señala Vanesa Teitelbaum —en consonancia con las renovadas miradas sobre este

problema de estudio—, el mutualismo fue una etapa inicial pero importante en la conformación de las identidades y culturas obreras, en tanto contribuyó a la vinculación de los trabajadores, impulsó prácticas de solidaridad y reciprocidad y articuló discursos y estrategias que ayudaron a su socialización y vinculación. De esta forma, la experiencia de artesanos y obreros, el descubrimiento de sus mutuos intereses y su interrelación a través del mutualismo fue un pilar que contribuyó a forjar su experiencia de clase.

A principios del siglo XX, las formas de sociabilidad mutual transitaban a “la formación de sociedades gremiales o de resistencia que se internaron en el espinoso itinerario de las demandas obreras” (Bravo-Teitelbaum, 2014, p. 68). Como explicáramos en el capítulo anterior, este pasaje contribuyó a que los trabajadores avancen en su definición como clase, debido —en gran medida— a la influencia del anarquismo y al socialismo, que siempre habían mirado críticamente al mutualismo por su debilidad para canalizar las reivindicaciones propias de los artesanos y obreros.

Estas ideologías alentaron la organización de los trabajadores, promovieron la defensa de sus intereses y la lucha por conquistar mejores condiciones laborales. De esta forma, ayudaron a forjar experiencias clave para la construcción de la identidad de la clase obrera. Los socialistas apostaron por la no violencia y la lucha gradual, por tanto reivindicaron la participación política de los trabajadores y la vía parlamentaria como una alternativa para mejorar las condiciones laborales. En este sentido, la opción electoral fue una apuesta fuerte, a través de ella el partido socialista impulsó importantes proyectos y leyes sociales. Por su parte, los anarquistas, contrarios a la participación político-parlamentaria, abogaban por la destrucción del Estado y el violento aniquilamiento del sistema capitalista. Distantes de una concepción clasista de la sociedad, reivindicaron la libertad absoluta del individuo. Como veremos a continuación, ambas tendencias permearon el universo laboral tucumano.

La transición del mutualismo a las sociedades de resistencia fue compleja y supuso la convivencia de ambas expresiones. En efecto, algunas sociedades de ayuda mutua asumieron y defendieron las reivindicaciones laborales de sus miembros a través de petitorios, mítines o huelgas y procuraron ayudar económicamente a los socios en coyunturas signadas por los conflictos y las protestas. Otras sociedades reafirmaron su perfil

eminentemente mutual. Al tiempo que muchos trabajadores optaron por la creación de sociedades de resistencia orientadas decisivamente a la defensa gremial de sus socios y en abierta confrontación con los propietarios de los talleres y fábricas donde laboraban.

La influencia del socialismo dinamizó este tipo de sociedades que priorizaban la unión y organización de los trabajadores como instancia clave en la defensa de la clase obrera. Podemos decir que la emergencia de sociedades de resistencia, atravesadas y definidas en función de los problemas y demandas de la clase trabajadora, fue una de las novedades del espacio laboral tucumano a principios del siglo XX. Un rasgo característico de las sociedades de resistencia fue la articulación de formas de protesta y la desconfianza hacia las autoridades públicas, a quienes identificaban como cercanas a los intereses de las clases propietarias. Por su parte, el gobierno miró con recelo este tipo de organizaciones, en tanto los discursos, prácticas y protestas cuestionaban el orden social y atentaban contra la armonía de clases.

Una de las expresiones más nítidas de este asociacionismo, como vimos anteriormente, fue el Centro Cosmopolita de Trabajadores fundado en 1897 con el propósito de mejorar las condiciones sociales y laborales de sus agremiados. En su seno convergieron dirigentes anarquistas y, particularmente, socialistas, quienes avanzaron en el espacio capitalino, en especial en el mundo de los oficios y profesiones, y lograron articular un discurso obrerista (Teitelbaum, 2011b, p. 680). Al parecer, las tensiones entre los dirigentes de ambas ideologías incidieron en el eclipse de esta organización, cuyo rastro desapareció hacia mediados de 1904 para dar lugar a la emergencia del Centro Socialista. Por su parte, la fundación en 1906 de la Federación Obrera Local Tucumana, que reunía a agrupaciones de obreros de la capital tucumana, revela la organización de la vertiente anarquista y su aspiración por disputar la adhesión de los trabajadores.

La Sociedad Gremial de Albañiles y Anexos creada en 1902, la Sociedad Gremial de Cocheros fundada un año después y la Sociedad de Obreros Sastres que irrumpió en 1904 expresan la vitalidad de la clase trabajadora, sus aspiraciones de organización y la lucha en defensa de sus intereses. La creación en 1902 de la Federación Obrera Tucumana –estructura organizativa que cohesionaba a diversas asociaciones de oficios a escala provincial–, y su

vinculación con la Federación Obrera Argentina (FOA) –fundada en 1901 por socialistas y anarquistas– condensan el dinámico mundo del trabajo provincial de principios de siglo XX.

La intención de articular el movimiento obrero tucumano con estructuras laborales de alcance nacional volvió a evidenciarse en 1904 con la vinculación a la Unión General de Trabajadores (UGT), nacida de la escisión de los socialistas de la FOA. Un año después, la creación de una filial de la UGT en Cruz Alta, departamento de fuerte impronta azucarera, y la convocatoria al primer congreso obrero revelaría el avance del socialismo, la capacidad de organización de los trabajadores, sus deseos por vincularse más allá de las fronteras provinciales y potenciar sus reivindicaciones en el seno de un colectivo más amplio y aglutinante. Al igual que los católicos, los socialistas apelaron al recurso de las conferencias para extender su influencia y generar adeptos, las giras de propaganda de destacados referentes del movimiento obrero nacional, como Adrián Patroni, Gregorio Pinto y Luis Lotito, entre otros, contribuyeron a la circulación de ideas y propuestas, al tiempo que otorgaron visibilidad a los problemas de la clase trabajadora.

3.1 Rituales y política: la celebración del 1º de mayo y las incursiones partidarias de los trabajadores

A principios del siglo XX, el avance de las sociedades de resistencia supuso una resignificación de la experiencia de la clase trabajadora. Esa transformación también se proyectó en el terreno simbólico, especialmente con el creciente protagonismo del 1º de mayo, efeméride por excelencia en el calendario de los trabajadores. Vanesa Teitelbaum reconstruyó el itinerario y las mutaciones de esta conmemoración entre 1897 y 1925, su trabajo precisa las particularidades del caso tucumano, sin perder de vista que en esta provincia, como en otros espacios del país y del resto de América Latina, estas celebraciones “servían para exhibir y reforzar el poder del movimiento obrero, al tiempo que reflejaban la disputa de las distintas fuerzas obreras y políticas para imponer sentidos y liderar la principal conmemoración de los trabajadores” (Teitlebaum, 2015, p. 191).

El mencionado Centro Cosmopolita de Trabajadores, constituido por anarquistas y principalmente socialistas, fue un gran impulsor del 1º de mayo

hasta 1904, fecha en que su disolución convirtió al Centro Socialista en uno de los principales artífices de las movilizaciones y rituales de esta celebración obrera. Como contrapunto, la impronta de los anarquistas en el mundo del trabajo también se expresó en términos conmemorativos y procuró una clara diferenciación con la jornada organizada por los socialistas. Esta puja de proyectos y sentidos se reveló abiertamente en 1908 cuando los militantes anarquistas refirmaron su concepción del 1º de mayo como una jornada de protesta y lucha obrera, distanciándose de los socialistas a quienes acusaban de convertir ese día en un festejo:

“El primero de Mayo no es un día de fiesta para la clase desposeída, aunque así los afirmen los socialistas, los que ofician de rebañizadores. El primero de mayo es día de recordaciones y de protestas [...] Y es por eso que no iremos a las plazas públicas en procesión apacible y decorativa, quede ello para los socialistas, los arlequines y los amantes del orden estatal. Nosotros los anarquistas no debemos servir de distracciones y solaz para la clase opresora y rapaz, saldremos a la calle no para cantar nuestros dolores en estrofas sentimentales sino para hacer algo más que todo eso, para exigir la parte que nos corresponde en el banquete social al que aportamos todo el caudal de nuestras energías y todo lo que se expone en la mesa”.⁴

Más allá de las filiaciones ideológicas, esta fecha sirvió para fortalecer los vínculos de solidaridad entre los trabajadores, constituyó un vaso comunicante para la difusión de los proyectos socialistas y anarquistas y ayudó a dar visibilidad a los trabajadores y sus demandas. Asimismo, la multitudinaria toma de las calles alertó a las autoridades públicas sobre los peligros de la conflictividad social y las incentivó a tomar medidas que oscilaron entre la represión, la integración y la contención del movimiento obrero.

A medida que el siglo XX avanzaba y la organización y lucha obrera se fortalecía, el 1º de mayo se resignificó. Las movilizaciones públicas fueron más numerosas, el recorrido de los manifestantes por las calles de la ciudad, la ocupación de determinados espacios públicos, particularmente las plazas más

⁴ *Germinal*, 1 de mayo de 1908. Cita extraída de Teitelbaum, 2015, p 176.

importantes, y el uso de emblemas y estandartes se repitió año tras año hasta convertirse en casi una rutina. Como señala Teitelbaum, socialistas y anarquistas se apropiaron de la celebración y proyectaron en un plano simbólico las disputas que los confrontaban en términos de organización y adhesión de los trabajadores. Los disímiles recorridos escogidos por unos y otros, la apropiación de determinadas plazas para llevar sus actos (los socialistas solían elegir la plaza San Martín y la Alberdi, mientras que los anarquistas se afincaban en la plaza Humberto I) y la disputa por los significados de la conmemoración revelan la puja de sentidos condensada en esa fecha. Finalmente, el triunfo simbólico del 1º de mayo se decidió en favor de los socialistas, quienes entendían esa fecha “como un día de fiesta, como un momento en que el conjunto de los trabajadores se convertía en una sola voz y demostraba el grado de unidad y poder alcanzado en todas partes del mundo, aunque también era un día de recordación de los que habían caído bajo las garras del capitalismo. Para el anarquismo, en cambio, era un día de lucha y luto por los mártires de la insensibilidad burguesa” (Lobato, 2009, p 177).

En 1919 la celebración obrera cobró un nuevo sentido en función de un contexto social signado por la acentuación de los conflictos laborales y la represión que el Estado y la patronal desplegó contra la clase trabajadora. En esa coyuntura, muchos gremios tucumanos decidieron declarar un paro general que, previsto para el 1º de mayo, prefiguró lo que se convertiría en una tradición: la conversión de esa importante fecha en un día no laborable, decisión que no sólo garantizaba una mayor presencia pública de los trabajadores, sino que expresaba la construcción y afirmación del poder obrero. En 1921, la histórica disputa entre socialistas y anarquistas se compeljizó con la presencia del comunismo, que también operó en el espacio público tucumano convocando a una manifestación para conmemorar el día del trabajador. Recordemos que en 1920, alentados por la Revolución Rusa y producto de divisiones y desmembramientos del socialismo y el anarquismo, se formó el partido comunista que reivindicaba la lucha y la formación de un partido de clase.

En 1925 la decisión del Presidente de la Nación de declarar el 1º de mayo como un día feriado, y la réplica de esa decisión por la Legislatura

tucumana, hizo “que el gobierno se apropiara de una conmemoración propia del universo de los trabajadores”. De esta forma, se modificó sustancialmente el sentido original de la conmemoración, que tradicionalmente había estado sujeta a la decisión de los obreros de “no trabajar los primeros de mayo”. Con la determinación política de incorporar esta fecha al calendario cívico nacional se pretendía diluir el cariz revolucionario y de protesta otorgado históricamente por los trabajadores (Teitelbaum, 2015, p.190).

La radicalización del movimiento obrero instó a los católicos a redoblar sus esfuerzos organizativos, inscritos en la armonía entre el capital y el trabajo. Así, con el objetivo de contrarrestar a los “enemigos socialistas”, en 1919 surgió la iniciativa de crear gremios católicos en las fábricas azucareras, siempre que su creación contara con la aprobación de los propietarios. El norte de esta organización sería la práctica mutualista, el cooperativismo, las cajas de ahorro y la instrucción técnica. A esta propuesta se sumó el fallido intento, devenido también de los católicos, de organizar la Comisión Provisoria de la Unión Sindical que procuraría reunir a los trabajadores de sindicatos de oficio o de ramas de oficio a quienes se les exigiría que fueran “hombres honrados que no combatan la religión ni la patria”. Este intento de agremiación por oficios a escala nacional tuvo escasa aceptación en el movimiento obrero tucumano, mucho más permeable a la influencia del socialismo, la iniciativa también fue víctima de las propias limitaciones del sindicalismo católico caracterizado por una actitud de mayor negociación con los patrones (Landaburu, 2013, p. 138).

Otra faceta del tránsito del mutualismo a las sociedades de resistencia fue la vinculada a la ponderación de la política y la relación con el Estado. Los socialistas bregaron por la conjunción de estrategias destinadas al mejoramiento de la clase obrera, que iban desde el boicot a la huelga general, pero la intervención en política y la reivindicación de la vía parlamentaria para conquistar mejoras sociales fue crucial. En tal sentido, el socialismo tucumano instó a revisar “el papel de la política, comprendida como un recurso necesario para conseguir el mejoramiento de las condiciones laborales. En este sentido, “alentaba a los trabajadores a votar por partidos que contemplaran en su

programa reformas legislativas favorables a los obreros” (Bravo-Teitelbaum, 2012, p. 74) como sucedió en 1904.⁵

A principios de los años veinte, la faz partidaria del socialismo posibilitó la llegada de sus diputados a la Legislatura tucumana, quienes se preocuparon por mejorar las condiciones de vida y de trabajo e impulsaron la elevación de proyectos de ley tendientes a revertir la existencia proletaria. Ejemplo de este compromiso fue la plataforma que presentaron en 1917 en el acto de proclamación del candidato a senador por la capital tucumana Gregorio Pinto, cuyos ejes giraban en torno a la instrucción pública, la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo para todos los trabajadores ocupados por el Estado y la adopción de leyes nacionales vinculadas a mejorar las condiciones laborales (Landaburu, 2001, p. 8). En este contexto de preocupaciones, en 1921, el partido socialista presentó por primera vez candidatos en todos los distritos y logró obtener el mayor número de votantes en San Miguel de Tucumán, accediendo, por primera vez, a una banca legislativa. El diputado socialista Manuel Vera Hernández fue impulsor de diversos proyectos, entre los que se destacó la prohibición del trabajo nocturno en los comercios y la iniciativa de asistencia médica obligatoria y gratuita en los ingenios, convertida en ley en 1925. Como contrapunto, y en consonancia con la impugnación que hacían del Estado y todas sus expresiones, los anarquistas rechazaron la organización partidaria por considerarla autoritaria y restrictiva de la libertad individual. Esta autoexclusión del juego partidario los llevó a privilegiar otras formas de acción política, principalmente la huelga.

En 1926 la incursión política de los trabajadores reconoció una particularidad que merece subrayarse, ese año ante la inminencia de las elecciones convocadas para elegir diputados nacionales y legisladores provinciales irrumpió en el mapa partidario una expresión estrechamente

⁵ Sin embargo, las primeras incursiones políticas de los socialistas dejaron un sabor amargo, particularmente su incursión en los comicios de 1904 destinadas a elegir gobernador y legisladores provinciales. En aquella coyuntura un grupo de socialistas decidieron apoyar la candidatura de Lucas Córdoba, desafiando el posicionamiento de la dirigencia nacional que bregaba por la prescindencia electoral. Esta puja entre la dirección nacional del partido socialista y la dirigencia local promovió divisiones internas, expulsiones y nulos resultados prácticos, así “la actividad electoral concebida por el socialismo como una instancia significativa de perfeccionamiento democrático y republicano entró en un cono de sombra hasta fines de la década” (Bravo y Teitelbaum, 2009, pp. 82-83).

asociada a los trabajadores: el partido laborista. Su aspiración era representar al amplio y heterogéneo mundo laboral (empleados de comercio, ferroviarios, tranviarios, metalúrgicos, conductores de carruajes, talabarteros, carpinteros, panaderos, peluqueros, entre otros), es decir, todos los que luchaban por el sustento diario y no se sintieran identificados con los postulados de los partidos políticos existentes. Los laboristas consideraban que era necesario que los trabajadores “lleven a las cámaras sus legítimos y directos representantes surgidos de las masas laboriosas”.⁶ (Landaburu, 2012, p.183).

En síntesis, en las primeras décadas del siglo XX los trabajadores irrumpieron en el escenario provincial como protagonistas destacados. La explotación laboral (prolongadas jornadas laborales, bajos salarios, hacinamiento e insalubridad en las fábricas y talleres, explotación de menores, trabajo nocturno, entre otras) fue terreno fértil para el avance de las sociedades de resistencia que, lideradas por anarquistas y socialistas, lucharon por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus agremiados. El asociacionismo, tanto el mutualista como el gremial; la articulación de rituales y símbolos (como la celebración del 1º de mayo); la difusión de las ideas a través de conferencias, periódicos y bibliotecas; y las múltiples formas de protesta, que analizaremos a continuación, contribuyeron a la conformación de la clase trabajadora que empezaba a forjarse en el Tucumán de principios del siglo XX.

4. La acción colectiva: huelgas, movilizaciones y petitorios obreros

El protagonismo de los trabajadores tucumanos en la formación de sociedades de resistencia y la articulación de protestas destinadas a mejorar sus condiciones laborales jalonaron los inicios del siglo XX. En este contexto, la huelga se convirtió en la más destacada herramienta de la lucha obrera. Las protestas destinadas a reclamar mejoras salariales, disminución de la jornada laboral y obtención del descanso dominical, entre otras, contribuyeron a la vinculación y definición de los intereses de los trabajadores, proceso que incidió en la conformación de su identidad de clase y en el cuestionamiento al orden establecido.

⁶ *La Gaceta*, 25 de febrero de 1926.

A principios de la centuria pasada, el Centro Cosmopolita de Trabajadores– convertido en el principal referente del socialismo y del movimiento obrero no sólo en Tucumán, sino en el norte argentino– fue un decidido impulsor de medidas de fuerza como la declarada en 1903 por los cocheros, quienes exigieron la disminución de la jornada de trabajo. Ese mismo año los obreros de la pavimentación protestaron contra el uso del vale como forma de pago y solicitaron la puesta al día de los salarios adeudados (Teitelbaum, 2011a, p. 82).

Sin embargo, el momento álgido de la protesta obrera en Tucumán tuvo lugar en 1904, año surcado por la conflictividad y los paros de labores. Ese año comenzó con la declaración de huelga de los ferroviarios, quienes demandaban aumento de salarios; continuó con la larga lucha de los dependientes de comercio por el descanso dominical y, a mitad de año, encontró su pico de efervescencia con la huelga de los peones azucareros de Cruz Alta. 1904 culminó con la huelga de las cigarreras –quienes con el apoyo del Centro Cosmopolita de Trabajadores y la Unión Gremial Femenina demandaron aumento salarial y disminución de las horas de trabajo–, y un nuevo paro de los cocheros, alentado por el incumplimiento de la jornada laboral. Al finalizar el año, los ferroviarios también llevaron a cabo una larga lucha exigiendo el aumento de salarios y la observancia de la jornada de 8 horas, protesta que contó con el respaldo de la Confederación Ferrocarrilera y el Centro Cosmopolita de Trabajadores y logró paralizar por un mes la línea del Ferrocarril Central Norte. Sin embargo, el resultado de la huelga supuso un duro revés para los trabajadores, la empresa clausuró los talleres, despidió a los huelguistas y no accedió a ninguna de las demandas obreras. (Teitelbaum 2011a, p. 81 y Teitelbaum, 2014, pp. 191-192).

A principios de siglo, la huelga comenzó a consolidarse como el instrumento privilegiado de la lucha obrera. Sin embargo, el repertorio de la confrontación también incluyó otras modalidades, como las protestas sin mayores niveles de organización (por ejemplo, la sublevación protagonizada en 1901 por los peones del ingenio Concepción), las formas de resistencia anónimas o disfrazadas (trabajo a desgano, rotura de maquinaria, amenazas, quema de cañaverales, entre otras) y la toma de las calles para manifestar la solidaridad con causas que superaban las demandas puntuales de un gremio o

un oficio para involucrar al conjunto de los trabajadores. Así sucedió en 1902 cuando el Centro Cosmopolita organizó dos grandes movilizaciones públicas, una para mostrar su adhesión al proyecto de ley sobre accidentes de trabajo y otra para manifestar su repudio a la ley de residencia. En esta misma tónica, a fines de 1907 la solidaridad entre los trabajadores volvió a hacerse presente en un mitin organizado para denunciar los atropellos de un empresario azucarero contra sus obreros o manifestar en 1909 el repudio por la ejecución del educador catalán Francisco Ferrer.

En este convulsionado mundo laboral se destacaron tres momentos de protesta obrera: la huelga azucarera de 1904, las campañas de los dependientes de comercio en 1907 y las huelgas azucareras de 1919 y 1923.

4.1 La primera huelga azucarera: demandas obreras, liderazgo socialista y mediación gubernamental (1904)

En 1896, la derogación de la ley de conchabo relajó los niveles de coacción ejercidos sobre los trabajadores tucumanos. Sin embargo, el vacío en materia de legislación laboral, particularmente en el universo agroindustrial, fue una constante que comenzó a revertirse tibiamente a principios de la década de 1920. Los empresarios azucareros contribuyeron decisivamente en esta situación, al considerar que las relaciones laborales pertenecían al ámbito de lo privado, lo que suponía que “las condiciones de trabajo no eran establecidas y reguladas por las agencias estatales, sino que eran definidas por los criterios personales y particulares de los empleadores” (Landaburu-Lenis, 2015, p. 431).

Ahora bien, para los empresarios azucareros su obligación con los trabajadores excedía la esfera laboral, en tanto debían preocuparse por sus condiciones de vida material y moral. Imbuidos por el catolicismo social, muchos industriales procuraron mejorar la vivienda de los obreros permanentes, brindar un mínimo de asistencia médica, fundar escuelas en el predio de la fábrica y otorgar pensiones a las viudas de los obreros. De esta forma, los patrones se erigían en dispensadores de beneficios que esperaban ser retribuidos con muestras de obediencia y fidelidad obrera. Esta situación generó condiciones de gran vulnerabilidad para los trabajadores y configuró un universo laboral sumamente heterogéneo, en tanto los empresarios fueron reticentes a convertir los beneficios sociales en derechos, reservándose la

decisión de asignarlos de forma discrecional y rechazando todo proyecto legislativo que los tornara en obligaciones (Bravo, 2004, p. 45). En este contexto, el trabajo en los pueblos azucareros permaneció circunscrito a la voluntad de una patronal contraria a toda intervención del Estado y refractaria a cualquier intento de organización gremial.

Más allá de los beneficios puntuales otorgados por los empresarios, la condición socio-laboral en los ingenios era deficiente y se agudizaba en la época de zafra cuando llegaban los obreros temporarios, el eslabón más numeroso y vulnerable de la cadena productiva azucarera. En 1904, Biale Massé se refirió a esta situación al señalar en su informe que:

“todos los ingenios son diferentes, y lo son más aún en el trato que dan a los obreros [...] Lo que hay de común en todos los ingenios es la jornada brutal de doce horas, que es inhumana y bárbara en las noches frías de invierno, cuando [...] hiela y llueve a plomo sobre las espaldas del obrero de cañera, que trabaja al aire libre [...] Es también igual en todos la falta de descanso dominical o siquiera hebdomadario, y el obrero que empieza fuerte acaba agotado y destruido. Y en todos es igual el mínimo de retribución posible”.⁷

Los intentos de los industriales de frenar el avance del socialismo y el anarquismo y la organización de la clase trabajadora fueron, en términos generales, exitosos. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, la resistencia y las protestas obreras encontraron intersticios por donde manifestarse. Así sucedió en 1903 cuando un pequeño cañero de Cruz Alta, Santiago Cardozo, ofreció su propiedad para que allí funcionara un Centro Cosmopolita. De esta forma, el socialismo avanzó en uno de los principales departamentos azucareros de la provincia en procura de alentar la organización de los trabajadores y la declaración de huelgas como instancias que les permitirían acceder a mejores condiciones socio-laborales.

En junio de 1904, la explotación y la vulnerabilidad laboral de los peones, conjugada con la avanzada del socialismo, promovió que un grupo de

⁷ Juan Biale Massé, *Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas*, t II, 2010, p. 249.

pequeños plantadores y trabajadores del ingenio San Miguel organizaran una asamblea para declarar una huelga en demanda de mejoras salariales. Sin embargo, la reunión fue disuelta por la policía, que violentamente irrumpió en la sede del Centro Cosmopolita. La represión y la debilidad organizativa llevaron a la dirigencia local a solicitar el apoyo de la Unión General de Trabajadores, que designó a Adrián Patroni para comandar el movimiento.⁸ El líder socialista buscó acordar con la patronal la suba salarial reclamada por los trabajadores pero la negativa del propietario del ingenio fue rotunda, decisión que se recrudeció con el despido de los huelguistas. Llegados a este punto, la propagación del conflicto por el resto de los ingenios fue percibida como una alternativa que ayudaría a fortalecer las reivindicaciones obreras, consistentes en un sueldo mensual de 50 pesos, sin ración y sin vales. Irónicamente, Biale Massé señaló que “la huelga nació en un ingenio, en el que se estimaba más la ganancia de la proveeduría que la de la industria misma. La explotación era atroz y absorbía todo el producto del trabajo del obrero”.⁹

La resistencia de los industriales a reconocer a Patroni como vocero y representante de los obreros y la necesidad de fortalecer al movimiento hizo que los socialistas redoblen la campaña huelguística por Cruz Alta, medida favorecida por la prescindencia del gobierno provincial, decidido a garantizar la no intervención de la policía en las reuniones (Bravo, 2004, p. 49 y Landaburu, 2013, p. 91).

“en vano los administradores, mayordomos y altos empleados recurrían a todo género de promesas y amenazas, no consiguieron detener la huelga, quedando atónitos en presencia de la actitud de la policía, la cual fue requerida para que los peones volvieran por la fuerza, los comisarios manifestaban que tenían orden de garantizar la libertad personal de obreros y patrones”.¹⁰

⁸ Adrián Patroni nació en Uruguay en 1867 y falleció en 1950 en Viña del Mar (Chile). Obrero pintor “fue un destacado dirigente obrero del socialismo argentino entre fines del siglo XIX y principio XX. Viajó por todo el país interviniendo como organizador de conflictos y huelgas. “En 1898 publicó un libro titulado *Los trabajadores*, donde describió la situación de los obreros argentinos en el orden social y económico, y que permanece todavía como una de las principales fuentes bibliográficas para el estudio de la clase obrera argentina”. Falcón, Ricardo: “Biografías de militantes sindicales”, en Mirta Z. Lobato (ed.): *CD Biografía de militantes sindicales de Ricardo Falcón más otros ensayos*, Buenos Aires, FFyL, UBA, 2014, pp. 204-205.

⁹ Juan Biale Massé, *Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas*, t. II, 2010, p. 248.

¹⁰ *La Vanguardia*, 20 de junio de 1904. Cita extraída de Landaburu, 2013, p. 91.

La propagación del movimiento de protesta fue una exitosa estrategia. Patroni convocó a los trabajadores de las distintas fábricas de Cruz Alta a una asamblea que alcanzó una adhesión amplia y fervorosa y sirvió para lanzar la amenaza de la huelga general. Si bien ésta no llegó a concretarse, la paralización de las labores productivas, y su propagación por varios ingenios del sur de la provincia en plena zafra, obligó a los empresarios a negociar acuerdos con el propósito de lograr la vuelta al trabajo. La magnitud que alcanzó el movimiento huelguístico impulsó a los propietarios a aceptar a Patroni como representante de los obreros, por su parte, la patronal estuvo representada por Alfredo Guzmán, dueño del ingenio Concepción, ambos referentes llegaron a un consenso y acordaron sujetarse a un arbitraje estatal. Finalmente, el 27 de junio de 1904, bajo la mediación del gobernador Lucas Córdoba, se firmó un convenio que establecía un sueldo mínimo para los peones de ingenio de 43 pesos mensuales, pagadero de forma quincenal y en moneda nacional. Esta cláusula tenía por fin terminar con el vale como forma de pago, por ende, el abastecimiento de los obreros en la proveeduría del ingenio ya no sería obligatorio (Bravo, 2004, p. 51 y Landaburu, 2013, p. 93). La contundencia de la suba salarial contrastó con el dispar acatamiento del acuerdo vinculado al vale, cuyo uso persistió durante décadas demostrando lo difícil que era erradicarlo por un simple acuerdo de partes, es decir, sin disponer de la fuerza de una ley.

La huelga implicó una conmoción de múltiples rostros. La medida de fuerza, y su exitoso resultado, fortaleció a los trabajadores azucareros, quienes por primera vez, a través de Patroni, se sentaron con la patronal a negociar sus demandas en presencia del gobernador. Sin embargo, esta primera y alentadora conquista no logró proyectarse en el tiempo. Poco a poco, los centros cosmopolitas perdieron vitalidad, eclipsándose hacia 1906, y las medidas de fuerza “sólo se verificaron en establecimientos aislados y, por lo tanto, su alcance fue limitado: el paro generalizado en una actividad se tornó imposible” (Bravo, 2004, p 56). Por otro lado, la resistencia de los empresarios a aceptar la mediación de Patroni y las críticas respecto de la actitud del gobernador evidenció la concepción que los industriales tenían sobre las relaciones laborales, es decir, como un vínculo estrictamente privado y

particular, ajeno a la regulación estatal (Landaburu, 2013, p. 94). Sin duda, para la patronal la huelga implicó un traumático suceso que expresó la conflictividad social y la capacidad de los trabajadores para paralizar la actividad productiva más importante de la provincia.

Para los funcionarios del gobierno provincial, la medida de fuerza encendió una luz de alarma. El avance del socialismo por el mundo del trabajo y la rápida propagación de la huelga alertaron al Estado sobre la necesidad de brindar respuestas para prevenir futuros conflictos que pusieran en cuestión el orden social y los anhelos de progreso. Sin embargo, la articulación de políticas sociales y la promulgación de la legislación laboral, vinculada a los trabajadores azucareros, recién reconoció un momento importante a principios de los años veinte, cuando el radicalismo promovió las leyes de jornada laboral de 8 horas y de salario mínimo.

La próxima situación generalizada de protesta azucarera irrumpió en 1923, es posible suponer que después de esta primera experiencia los empresarios redoblaran el control y desalentaran la organización obrera, esfuerzos que coincidieron con el retraimiento de los centros cosmopolitas en la zona azucarera. Sin embargo, es posible pensar que los trabajadores encontraron otras formas para manifestar su descontento, como el trabajo a desgano, las amenazas, la rotura de maquinaria, la quema de cañaverales, entre otras.

4.2 Los dependientes de comercio: la conquista del descanso dominical y la jornada laboral (1907-1912)

Las demandas y protestas destinadas alcanzar un día de descanso en la semana y la reducción de la jornada laboral a 8 horas fueron las reivindicaciones más recurrentes de los trabajadores de principios del siglo XX. En el caso tucumano, los peluqueros y los dependientes de comercio lideraron a través de sus organizaciones gremiales el reclamo del descanso hebdomadario, es decir, semanal. La primera conquista fue la promulgación de una ordenanza municipal, a fines de 1902, que estableció el cierre dominical para promover el descanso de los dependientes de comercio de la capital. Un año después la medida se hizo extensiva a los trabajadores del comercio mayorista y, poco a poco, se propagó al interior de la provincia. Sin embargo,

el incumplimiento de la ordenanza por parte de los propietarios fue denunciada por los dependientes y visibilizada a través de la prensa de la época (Teitelbaum, 2011c, p. 239-240).

El siguiente paso de los trabajadores se orientó a superar el alcance municipal del reciente derecho, motivo por el cual iniciaron una campaña en favor de la sanción de una ley de carácter provincial. En este contexto, en 1904 la Unión Dependientes de Comercio presentó a la Legislatura un proyecto de ley avalado por la mayoría de los propietarios de las casas comerciales. Sin embargo, pasaron dos años y la propuesta no conseguía ser tratada. Alentados por la sanción de la ley de descanso dominical, promovida por el socialismo y sancionada en 1905 con jurisdicción en la Capital Federal, los dependientes tucumanos enviaron nuevamente, en abril de 1906, un pedido para que la Cámara de Diputados incluyera en sus sesiones extraordinarias el tratamiento del proyecto. A lo largo de estos años, el apoyo de la prensa fue clave, especialmente del diario *El Orden*, que a través de sus páginas alentó y apoyó la reivindicación laboral en cuestión. Así, “las prácticas de protesta desarrolladas por las sociedades gremiales y mutuales de trabajadores, en articulación con la prensa, ocuparon un lugar central en el camino hacia la legislación laboral” (Teitelbaum, 2011c, p. 242).

Finalmente, después de cinco años de demandas, protestas y conquistas parciales, se sancionó la ley de descanso dominical, primera ley específicamente laboral de la provincia. La nueva normativa generó una situación ambigua. Por un lado, fue recibida con gran júbilo por los trabajadores, especialmente por los dependientes, quienes a través de su asociación gremial organizaron una gran movilización para celebrar la conquista. Por otro, los limitados alcances de la ley (que excluía a quienes vendían artículos de primera necesidad) promovieron protestas, como la protagonizada por los oficiales panaderos, quienes finalmente alcanzaron un acuerdo con la patronal y conquistaron este derecho. Por su parte, socialistas y anarquistas “organizaron un *meeting* para apoyar la ley vigente de descanso dominical y pronunciarse en contra del decreto reglamentario que restringía el alcance de esta medida” (Teitelbaum, 2011c, p. 243). La movilización, liderada por la Federación Obrera Local y la Confederación del Trabajo en Tucumán, concitó grandes niveles de adhesión. El lugar de reunión fue la plaza Lamadrid,

desde allí columnas de trabajadores, portando una bandera roja y acompañados de una banda de música, marcharon por la ciudad. El recorrido culminó en el local del sindicato de mozos, donde un líder anarquista brindó un encendido discurso.

Finalmente, cuando la manifestación ya se había disuelto, un grupo de dirigentes presentó a los diputados una nota para solicitar el respeto y cumplimiento de la ley de descanso dominical. También pidieron a los legisladores la conservación de la cláusula que, prevista en la ley, estipulaba la prohibición de vender bebidas alcohólicas los domingos y días de fiesta, medida que según los dirigentes contribuiría a disminuir la embriaguez.¹¹

Los dependientes de comercio volvieron a protagonizar otra importante protesta a principios de noviembre de 1912. La forma de evidenciar el descontento por el incumplimiento de la patronal de no cerrar los negocios a las ocho de la noche, tal como lo establecía la ley, suscitó una violenta acción colectiva por parte de los trabajadores. Al filo de las 20 horas, de forma tumultuosa, un grupo de dependientes recorrió el centro de la ciudad, dirigiéndose especialmente a los comercios que infringían la legislación. El primer blanco fue la zapatería La Catalana, sus propietarios cenaban cuando

“de pronto se oyeron estruendosos vivas, pero ello no puso en cuidado a la familia del señor Puig, pues creyó que se trataba de una manifestación política. Grande fue la sorpresa al ver penetrar a un considerable grupo de individuos al negocio, los que decían: ¡Que se cierre! ¡Que se cierre! y arrojaban a la vez pedradas en todas las direcciones. Las pedradas llovían, quebrando vidrieras y derrumbando cajas de botines. Una sirvienta de nombre Carmen Olea, recibió un golpe en el pie izquierdo, que le produjo una contusión leve. En la forma que tiraban las piedras, podían muy bien haber muerto a cualquiera, pegándole en la cabeza”.¹²

¹¹ Como señala Teitelbaum, esta preocupación ya estaban presentes en los reglamentos mutualistas que repudiaban hábitos considerados deshonestos, como la embriaguez y las riñas, conductas que podían concluir con la expulsión de los socios. Asimismo, este señalamiento fue realizado por socialistas y anarquistas, quienes combatieron el alcoholismo entre las clases trabajadoras por considerarlo un elemento de dominación que alejaba al obrero del compromiso con sus pares y, por ende, los distanciaba de la lucha por la emancipación del capitalismo.

¹² *El Orden*, 6 de noviembre de 1912. Cita extraída de Teitelbaum, 2016.

Tiendas, joyerías y peluquerías se convirtieron en los próximos objetivos de los manifestantes. La intervención policial puso fin a la tumultuosa protesta que dejó un saldo de múltiples heridos, vidrieras rotas y diez detenidos, entre los que se encontraba Ángel F. Derisso, un peluquero de filiación anarquista, a quien se sindicó como responsable de lo sucedido. Como señala Teitelbaum, este episodio sirve para preguntarnos no sólo por protestas laborales, sino que nos invita a reflexionar sobre los imaginarios, las estigmatizaciones y percepciones que en determinado momento circularon en la sociedad. En tal sentido, al responsabilizar “de la protesta de los dependientes de comercio en Tucumán a uno o dos individuos reputados como ‘peligrosos’, los grupos dominantes evitaban contemplar seriamente los problemas laborales que se suscitaban ante la falta de cumplimiento de los comerciantes de las normativas y leyes de trabajo”. De esta forma, entre 1917 y 1919, cuando la conflictividad social se profundizó a nivel nacional, la disconformidad de los dependientes volvería a irrumpir en el universo laboral tucumano (Teitelbaum, 2016, pp.81-82).

4.3 Las huelgas azucareras de 1919 y 1923

En 1916, la llegada del radicalismo al gobierno nacional estuvo marcada por un momento álgido de la protesta obrera, sobre todo en el periodo 1917-1921, y por la reformulación del rol del Estado frente al movimiento obrero caracterizada por una postura de mayor diálogo y negociación. Sin embargo, la asunción del papel arbitral del Estado se conjugó con medidas represivas contra los trabajadores, cuyo ejemplo más dramático fue la violencia desplegada contra los peones patagónicos. En este contexto, en 1917, mediante un decreto, el gobernador de Tucumán creó el Departamento Provincial de Trabajo (DPT), institución nacida de la preocupación por buscar soluciones frente a la creciente conflictividad laboral.

En mayo de 1919, los trabajadores de distintos ingenios de la provincia desarrollaron reuniones para discutir sus condiciones de trabajo y articular protestas destinadas a la conquista de aumentos salariales y la reducción de la jornada laboral. Finalmente, la declaración de huelga se impuso como herramienta de la lucha obrera y rápidamente el movimiento de protesta se extendió por varios ingenios como Los Ralos, La Providencia y La Trinidad, en

este último caso, los obreros designaron a César Asís, afiliado del partido socialista, como su representante frente a la patronal.

Obreros y empresarios alcanzaron acuerdos parciales, destacándose el firmado en el ingenio La Trinidad que, entre otras cláusulas, implicó el reconocimiento de la jornada laboral de 8 horas, el pago de un jornal mínimo de 3 pesos diarios para los trabajadores mayores de 16 años, la readmisión del personal cesanteado en las coyunturas huelguísticas de 1918 y 1919 y el compromiso de la patronal de avisar al centro obrero de la fábrica cuando por causas justificadas tuviera que despedir a un trabajador.¹³ De esta forma, los obreros conquistaron mejoras laborales importantes –en términos salariales y de extensión de jornada–, pudieron neutralizar las represalias de la patronal contra los huelguistas y lograron el reconocimiento y legitimidad del centro obrero, uno de los puntos que más discusión generó entre los empresarios azucareros. Días más tarde, los trabajadores publicaron una solicitada en la prensa local para precisar que el Departamento Provincial de Trabajo no había intervenido en la firma del convenio y la solución del conflicto se había alcanzado gracias a la mediación del delegado socialista. En este sentido, se pretendía mostrar como poco eficiente a la agencia estatal, dado que los convenios se habían suscrito entre los trabajadores y los patrones de manera privada, es decir, sin su intervención. El DPT también fue cuestionado por los empresarios, quienes acusaban a su director de promover la conflictividad en los ingenios. De esta forma, la construcción de legitimidad de la nueva agencia estatal fue un complejo proceso marcado por la resistencia de la patronal, la desconfianza de muchos trabajadores y los cuestionamientos del socialismo (Landaburu y Lenis, 2015, p. 437).

Este foco de conflicto en plena zafra alertó al conjunto de los empresarios, quienes para evitar la propagación de huelgas decidieron otorgar ciertas mejoras, particularmente la jornada de 8 horas. Si bien los empresarios azucareros podían acceder a algunas reivindicaciones “consideraban inaceptable la exigencia que para despedir a un obrero debían previamente pedir autorización a los demás obreros o a sus organizaciones”, tal como rezaba el convenio alcanzado en el ingenio La Trinidad (Landaburu y Lenis,

¹³ *El Orden*, 31 de mayo de 1919. Cita extraída de Landaburu y Lenis, 2015, p. 437.

2015, p. 440). En términos generales, los empresarios rechazaban la intervención del Estado en materia laboral y consideraban inadmisibles la injerencia obrera en asuntos vinculados a la contratación o despido del personal, prerrogativa patronal celosamente defendida.

La preocupación por las huelgas era inescindible del avance de la organización obrera promovida por el gobierno radical y el DPT a través de la creación en 1919 de la Cámara del Trabajo, que procuraba alentar la formación y reunión de gremios en dicha institución para avanzar en el arbitraje y solución de los problemas laborales. En el aliento otorgado a la organización de gremios, el gobierno esperaba contar con la anuencia de la patronal pero el cerrado y privado mundo laboral azucarero miró con recelo la iniciativa. En efecto, la propuesta despertó la desconfianza y resistencia de los empresarios, quienes como García Fernández, propietario del ingenio Bella Vista, consideraban que si bien, por un lado, la medida contribuía a evitar la intromisión del socialismo y otorgaba cierto control a los propietarios en los centros obreros –ya que los involucraba en su formación–, por otro lado, implicaba la profundización de la intervención del Estado en la esfera del trabajo. Suponían que la agencia estatal “podía promover disturbios con el objetivo de brindar soluciones y así capitalizar políticamente los beneficios que traería aparejados la clausura de los conflictos” (Landaburu y Lenis, 2015, p. 439).

Reducir la escala de observación y conocer lo sucedido en el ingenio Bella Vista en este contexto de activación gremial nos permite advertir la magnitud de la resistencia y los temores de la patronal. En efecto, en 1919 cuando los obreros intentaron capitalizar el auspicio estatal y avanzar en la conformación de su organización laboral, los propietarios manifestaron su tenaz e intimidatoria oposición expresada en el despido de los activistas del gremio. El tono de la carta que el hijo del propietario del Bella Vista le escribió a su padre, quien se encontraba en Buenos Aires, revela la rápida y coactiva respuesta esgrimida: “sabemos que abrieron en el Juzgado de Paz un registro para que se inscriban todos los peones que quieran formar parte de la sociedad [...] a uno ya se lo despidió sin darle explicaciones de porqué. Y a los otros 4

se los prevendría [sic] de que serán despedidos si forman parte.”¹⁴ Paralelamente, los propietarios organizaron una policía privada del ingenio destinada a amedrentar a los activistas.

Estos mecanismos coactivos se conjugaron con estrategias de cooptación destinadas, principalmente, a los trabajadores que lideraban el movimiento. En tal sentido, García Fernández le escribió a su hijo: “debes procurar que todos los que hacen cabeza se conviertan en seguidores del ingenio. Es cuestión de dinero y de saberlo ofrecer”. Pero el temor de no poder neutralizar el descontento ni frenar la declaración de la huelga llevó a los propietarios a barajar la posibilidad de suspender las raciones alimentarias otorgadas a los obreros: “si, cosa no probable, tenemos que suspender la molienda por huelga deberíamos cerrar 3 o 4 días la fábrica y no darles de comer”.¹⁵ Cuando el conflicto alcanzó su cenit y un grupo de obreros se presentó con un pliego de condiciones ante García Fernández (hijo), para exigir un aumento salarial, éste los despidió sin mediar explicaciones, decisión que desarticuló la protesta y aseguró la continuidad de la molienda (Lichtmajer, Gutiérrez y Santos Lepra, 2016, p.224).

Aunque la huelga no llegó a concretarse, los despidos y la posibilidad de suspender las raciones alimentarias, poniendo en riesgo la supervivencia obrera, evidenciaban hasta dónde era capaz de llegar la patronal para mantener sus prerrogativas en materia de fijación de salarios y extensión de la jornada laboral. Además de cercenar cualquier atisbo de práctica gremial, la cerrada defensa de las atribuciones de los propietarios tuvo el doble objetivo de visibilizar el malestar empresarial frente a los intentos del gobierno de regular las relaciones entre el capital y el trabajo y, como decía García Fernández, “demostrar a los obreros que somos más fuertes que ellos”.

En 1923 otra huelga azucarera conmovió a Tucumán. La propagación de la conflictividad por el departamento de Cruz Alta –que concentraba gran cantidad de ingenios–, y su estrecha vinculación con la promoción de las primeras leyes vinculadas a los obreros azucareros otorgaron particular

¹⁴ Archivo del Centro Cultural Alberto Rougés, Correspondencia de Manuel García Fernández (hijo), Carta de Manuel García Fernández (hijo) a su padre, Bella Vista, 21 de mayo de 1919, f. 1.

¹⁵ Archivo del Centro Cultural Alberto Rougés, Correspondencia de Manuel García Fernández (hijo), Carta de Manuel García Fernández (hijo) a su padre, Bella Vista, 4 de junio de 1919, f. 1.

resonancia a la protesta. En diciembre de 1921 Octaviano Vera inauguró el segundo gobierno radical, al año siguiente un grupo de legisladores afines a ese partido presentaron dos proyectos de ley que involucraban sensibles demandas obreras: el salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas. La primera iniciativa estipulaba para los obreros de fábrica mayores de 18 años un jornal de 4,20 pesos por 8 horas de trabajo, fijación que suponía un aumento salarial del 40%. En caso de consenso entre los patrones y los obreros, el DPT podía autorizar jornadas de 10 horas durante tres meses al año pero las horas extras debían pagarse con un recargo del 50%. El segundo proyecto establecía la jornada de trabajo de 8 horas para el personal de los ingenios. La aprobación de esta iniciativa implicaba sumar un nuevo turno laboral en las fábricas durante la zafra, lo que suponía el sustancial aumento de la mano de obra y el creciente aumento de los costos productivos. Estos motivos generaron polémica y una enconada resistencia industrial.

Los proyectos fueron aprobados sin mayores inconvenientes en el Senado donde Vera disponía de los votos necesarios. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, para sortear la mayoría política adversa, el gobernador convocó a una sesión extraordinaria en la que impidió el ingreso de los legisladores opositores. Finalmente, en una tumultuosa sesión las leyes fueron aprobadas. Los industriales reclamaron la ilegalidad e inconstitucionalidad de las leyes obreras y exigieron que las mismas no se aplicaran, “dejando el contrato de trabajo a la libre convención entre patrones y obreros, limitándose el PE a garantizar la libertad de trabajo e industria” (Landaburu y Lenis, 2015, p. 449). Presionado por los industriales, en mayo de 1923, Vera firmó un decreto que establecía la neutralidad del poder ejecutivo provincial en la aplicación de las leyes laborales aprobadas, cuyo cumplimiento quedaba sujeto al acuerdo de las partes. Los legisladores que habían promovido la nueva legislación y la Federación Obrera Radical confrontaron la decisión del gobernador y alentaron la protesta de los trabajadores azucareros en una coyuntura clave: el inicio de la zafra.

El movimiento huelguístico, que involucró alrededor de 15.000 trabajadores, comenzó en el ingenio Santa Ana para luego extenderse por Los Ralos, Concepción, La Trinidad y La Providencia y generalizarse, a lo largo de casi 15 días, por el departamento de Cruz Alta. La fracción de los diputados

radicales que habían promovido las leyes y que procuraban disputarle al socialismo la influencia sobre la clase trabajadora azucarera alentó la protesta con la complicidad de la policía. En este convulsionado contexto, la huelga se conjugó con importantes movilizaciones rurales.

“Apareció en el ingenio La Florida una columna de 1.600 manifestantes. A la cabeza marchaba una caballería poco numerosa, luego personas que llevaban banderas radicales. Cerrando la movilización otra sección de caballería. Estaba comandada por los comisarios Isaías Garro, Napoleón Vera, Juan Mendoza y Félix Melían. Formaba parte del Comando el presidente de la Comisión de Higiene y Fomento de Delfín Gallo de apellido Lucena”.¹⁶

Ante la falta de reacción del gobierno provincial, los empresarios decidieron cerrar las fábricas. Argumentaron que los asaltos a los ingenios y la violencia de los huelguistas implicaban la violación de las garantías constitucionales. Asediado por la escalada de la conflictividad, Vera decidió el reemplazo del Jefe de policía y ordenó la detención de varios referentes del movimiento huelguístico. En Cruz Alta se clausuraron los locales donde se realizaban las asambleas y se prohibió la circulación de grupos mayores de tres personas. El gobernador procuró mediar en el conflicto y dirigió a los trabajadores un manifiesto en el que los instaba a aceptar un jornal de \$3,50 para los obreros de fábrica (frente a los \$ 4,20 que establecía la ley). Finalmente, frente a la persistencia del cierre de las fábricas, el presidente Marcelo T. de Alvear envió al Comandante de la V Región Militar para intervenir en el asunto. Esta decisión puso fin al conflicto, el que culminó con un ambiguo resultado: la promulgación de la jornada laboral de 8 horas y un pequeño aumento salarial para los obreros azucareros (Bravo, 2008, pp. 259-260).

También los ferroviarios impulsaron protestas importantes. Como lo estudió Silvana Palermo, un foco de conflicto se vinculó con los cambios generados por la introducción de la organización científica del trabajo. En efecto, los obreros calificados de los talleres de Tafí Viejo resistieron la división de tareas y enfrentaron la multiplicación de técnicos y supervisores encargados

¹⁶ *El Orden*, 2 de junio de 1923. Cita extraída de Bravo, 2008, p. 258.

de analizar y controlar esta nueva forma de trabajo. Las protestas en los años 1918 y 1919 fueron constantes y virulentas. Otro punto de tensión fue la introducción de incentivos salariales destinados a aumentar la productividad, su falta de limitación y precisión hizo que los pagos dependieran de las estimaciones de los ingenieros y especialistas, motivo que los hacía carecer de previsibilidad y que también generó conflictos entre los ferroviarios (Palermo, 2015, pp. 50-53).

En síntesis, los bajos salarios, el uso del vale como forma de pago, las largas jornadas laborales, el trabajo nocturno, la ausencia de descanso semanal, el sistema de incentivos salariales individuales, entre otras, fueron motores determinantes de la protesta obrera, especialmente de las huelgas que se convirtieron en una herramienta privilegiada para canalizar la lucha obrera. Asimismo, las demandas protagonizadas por los trabajadores alertaron a los gobernantes a promover la intervención del Estado, que a través del diseño e implementación de políticas sociales procuró atenuar la conflictividad social (Suriano, 2006, p. 15).

5. Avance legislativo e institucional: primeras leyes obreras y creación del Departamento Provincial de Trabajo

Como en otras latitudes, en Tucumán, la acción de socialistas y anarquistas; la formación de sociedades mutualistas y de resistencia; las generalizadas huelgas azucareras; las múltiples protestas urbanas; así como los rituales y celebraciones propiamente obreros dieron visibilidad a la clase trabajadora y a un conjunto de problemas sociales que promovieron una incipiente legislación laboral y políticas sociales.

En 1907, la Constitución de la provincia de Tucumán fue reformada y en esa coyuntura actores vinculados al reformismo liberal y al catolicismo social impulsaron la inclusión de un artículo que hacía foco en las condiciones laborales, especialmente de los grupos más vulnerables. En tal sentido, la nueva Constitución estipuló que la Legislatura reglamentaría el trabajo y la salubridad en las fábricas y especialmente el de las mujeres y niños (Ostengo de Ahumada, t. 1, p. 35). En la Convención Constituyente, Juan B. Terán señaló que la moción no era una cláusula vacía, por el contrario, se trataba de resolver un asunto que afectaba la vida misma de la provincia:

“Baste recorrer la campaña para ver a los obreros demacrados y anémicos, lo que hace prever con tristeza que las generaciones futuras llamadas a reemplazarnos, serán débiles, raquíticas, incapaces de proseguir la obra de progreso en que estamos empeñados. Este cuerpo debe iniciar la reforma demostrando así que se preocupa empeñosamente de la suerte de una clase social que desgraciadamente no está representada en él”.¹⁷

Sin embargo, en gran medida, el mencionado artículo constitucional nació de la preocupación de resguardar la potestad de la provincia a legislar en materia laboral, dado que en ese momento el Congreso nacional discutía diversas leyes sociales que, impulsadas por los socialistas, se temía tuvieran jurisdicción en todo el país (jornada de 8 horas, descanso semanal, reglamentación del trabajo de mujeres y niños). Finalmente, las leyes votadas en el Congreso restringieron su alcance a la Capital Federal y los territorios nacionales. En los años siguientes, la debilidad de la legislación provincial, tendiente a proteger al obrero y mejorar sus condiciones socio-laborales, dejó entrever que el temor, más que el convencimiento, había impulsado la inclusión de ese artículo constitucional. En 1907 se promulgaron tres leyes que no modificaron “sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de los asalariados de la provincia” (Bravo, 2004, p. 58). Recién en los años veinte, con la llegada del radicalismo al gobierno y la actuación de los primeros diputados socialistas, se impulsaría con mayor énfasis la promoción de leyes y políticas sociales.

En 1907 se promulgó el descanso dominical pero únicamente para los dependientes de casas de comercio. La ley excluyó de este beneficio a quienes trabajaran en restaurantes, fondas y casas de comidas; en mercados y fuera de ellos vendiendo aves, carnes, pescados, leña y frutas; también exceptuó de esta conquista a los que laboraban en panaderías, tambos, lecherías y almacenes y a quienes se dedicaban al reparto de carne, leche, pan y otros artículos comestibles. Es decir, la norma excluyó a todos los trabajadores vinculados a la comercialización de productos de primera necesidad. Como ya

¹⁷ Ostengo de Ahumada, Ana María: *La Legislación laboral en Tucumán. Recopilación ordenada de leyes, decretos y resoluciones sobre el derecho del trabajo y seguridad social, 1939-1969*, t. 1, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1969, p. 36.

fue señalado, el restringido alcance de la legislación impulsó protestas tendientes a ampliar este derecho laboral. También ese año la Legislatura instituyó un fondo de jubilaciones y pensiones, denominado Monte Pío Civil, destinado a los funcionarios, empleados y agentes civiles de la administración y a los directores, empleados y personal de la enseñanza. Otra vez los alcances de la ley fueron restringidos, en tanto, sólo competía a un reducido número de trabajadores, la mayoría de ellos de la capital tucumana, donde se concentraban los empleados estatales. La tercera ley votada en 1907 fue la de Amparo del Hogar que declaraba exentas del pago de contribuciones a las pequeñas y medianas propiedades urbanas (cuya tasación no excediera los 5.000 pesos) y rurales (que no superaran las 20 hectáreas). “En ambos casos se asistía a una franja de propietarios humildes, que incluía a un segmento del artesanado urbano y a los pequeños propietarios rurales” (Bravo, 2004, p. 58).

Específicamente en lo que atañe a la agroindustria azucarera, donde se concentraba la mayor cantidad de mano de obra, la abolición de la ley de conchabo (1896) generó un vacío legal que, extendido a lo largo de varias décadas, reconoció un incipiente avance en 1923 con la promoción de las leyes de salario mínimo y jornada legal de trabajo de 8 horas. La prolongada ausencia de legislación social azucarera implicó la existencia de diversas y vulnerables condiciones laborales en los ingenios, situación que reafirmó la concepción privada de la relación entre el capital y el trabajo defendida por la patronal.

En 1907, mientras en Tucumán se promulgaban las mencionadas leyes, el Congreso de la Nación, al influjo del socialismo, aprobaba la reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños. Frente a este avance legislativo, el Centro Azucarero Argentino, corporación que organizaba a los industriales azucareros, llamó a los diputados nacionales de la provincia a combatir la mencionada reglamentación por considerarla perjudicial para los intereses y el desarrollo de la agroindustria. En este contexto, en una de las sesiones en que se discutió el proyecto, el diputado Miguel Padilla rechazó el carácter general del mismo, es decir, su aplicación extensiva a toda la Nación y defendió la atribución de las provincias de legislar sobre la materia, posición sustentada en la vigencia del federalismo y la diversidad de situaciones laborales existentes

en el país, que sólo podían ser contempladas por las legislaturas locales. En tal sentido, señaló:

“Yo sé, señor presidente, que en la provincia que represento existen fábricas donde trabajan mujeres y niños, y en las cuales el trabajo no es pesado; absolutamente, es un trabajo bien liviano. Y esas mujeres y esos niños a quienes según esta ley se les prohíbe trabajar, puesto que los patrones no podrán en tales condiciones tomarlos en sus fábricas, se entregarán por completo a la vagancia. Yo sé que un niño de doce años puede trabajar cuatro o seis horas diarias sin perjudicar absolutamente su salud, beneficiándose y beneficiando con su ayuda, dentro de su esfera de acción, a sus padres, pobres por lo general”.¹⁸

En 1917, la llegada del radicalismo al poder alentó el tratamiento de sensibles cuestiones laborales que despertaron la intransigencia de los industriales azucareros y suscitaban controversias que culminaron con la intervención federal de los dos primeros gobiernos radicales, el de Juan Bautista Bascary (1918-1920) y el de Octaviano Vera (1922-1923).

Una de las primeras medidas impulsadas por el gobierno de Bascary fue la reglamentación, a partir de un decreto, de la ley nacional sobre accidentes de trabajo. Esta ley, votada en el Congreso de la Nación en 1915, se sustentó en la idea del “riesgo profesional”, es decir, la responsabilidad que tenía la patronal en los accidentes de sus trabajadores durante la prestación de servicios y, por ende, la obligación de pagarles una indemnización. Esta norma puso fin a la denominada “culpa patronal”, en la que el “obrero debía cargar con la tramitación y el costo que le suponía culpabilizar al patrón por los daños o lesiones sufridas”, por tanto, hasta la sanción de la ley “si se producía un accidente, el patrón era responsable únicamente si el trabajador podía demostrar la responsabilidad de aquel, y los gastos que suponía esta demostración corrían por cuenta del obrero” (Ramacciotti, 2011, p. 269). Si bien en Tucumán muchas fábricas azucareras, por ejemplo, tenían asegurado a su

¹⁸ Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 14 septiembre de 1906, p. 884.

personal contra accidentes y enfermedades, el decreto instauraba un derecho que resguardaba y equiparaba a todos los trabajadores.

En diciembre de 1917, a través de un nuevo decreto, el gobernador creó el Departamento Provincial de Trabajo (DPT) que absorbió las funciones de la Oficina de Estadística y del Trabajo fundada en 1913 bajo la gobernación de Ernesto Padilla.¹⁹ La marca de origen con la que nació el Departamento, es decir, por decreto y no por acuerdo de la Legislatura provincial, complicó su actuación, en tanto esta debilidad se convirtió en un argumento utilizado por la patronal para no acatar las reglamentaciones. Así lo señalaba en 1925, el director de la agencia:

“Se presentan dificultades con ciertos patrones que niegan legalidad a la existencia del Departamento por el hecho de haber sido fundado por decreto del P.E. en vez de serlo por ley. Basándose en esta circunstancia niegan facultades al Departamento para hacer cumplir las leyes y aplicar multas por infracciones a ellas”.²⁰

Sin embargo, la ausencia de una ley que respaldara y brindara mayor legitimidad a su accionar no atenuó la importancia e impacto de la nueva institución. Los industriales miraron con recelo la intervención del Estado a través del DPT, en tanto cuestionaba la visión privada de las relaciones laborales que, férreamente defendida por ellos, rechazaba toda injerencia estatal (Landaburu, 2013, pp. 88-89).

Las funciones más importantes del DPT fueron promover el cumplimiento de las leyes; ofrecer su mediación para solucionar los conflictos; resolver las solicitudes sobre excepciones al descanso dominical; aplicar penas en caso de incumplimiento de la legislación; observar y estudiar los resultados de las leyes obreras e indicar modificaciones. Asimismo, se proponía llevar un registro de las sociedades patronales y de empleados; estudiar las condiciones morales e intelectuales de los obreros y empleados; analizar la implementación

¹⁹ Recordemos que en 1907 se creó el Departamento Nacional de Trabajo, lo que supuso profundizar la presencia y el papel regulador del Estado en las relaciones entre el capital y el trabajo. En 1912 se promulgó la ley orgánica que estipuló las funciones y alcances de la nueva agencia estatal y circunscribió su jurisdicción a la Capital Federal y los territorios nacionales (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco, Formosa y Misiones), situación que impulsó la creación de departamentos provinciales de trabajo.

²⁰ Archivo de la Legislatura de Tucumán, Departamento Provincial de Trabajo, Memoria anual, 1925, exp. 848, letra D. Cita extraída de Landaburu, 2013, p.127.

de un sistema de seguridad en los espacios laborales y vigilar el empleo de mujeres y niños en la industria y el comercio. Finalmente, actuaría como un ente coordinador y mediador de la oferta y la demanda de trabajo “buscando para los obreros la colocación conveniente y para los patrones los obreros competentes” (Landaburu, 2013, p. 90).

En sintonía con el mayor involucramiento del Estado en materia laboral, expresado en la creación del DPT, los primeros gobiernos radicales intentaron avanzar en materia de legislación laboral. Más allá de las resistencias suscitadas en 1907, el trabajo de las mujeres y niños se reglamentó en 1914 bajo la gobernación de Ernesto Padilla. Sin embargo, en la primera administración radical, el director del Departamento le solicitó a Bascary una nueva reglamentación de la ley, en tanto las medidas protectoras eran infringidas de forma constante. El funcionario consideraba que el trabajo de estos sectores de la población se propagaba “como consecuencia de la disminución de la oferta de trabajo para los hombres y el encarecimiento del costo de la vida” y el menor jornal percibido por las mujeres y los niños.²¹ Sobre este diagnóstico, en 1918 se promulgó un nuevo decreto que impulsaba un control más estricto del trabajo de los menores, a quienes se procuró garantizar la instrucción obligatoria.²² La generalizada idea de que el trabajo femenino era auxiliar o complementario incidió en la merma de sus salarios. Esta calificación implicaba que la remuneración de la mujer, y también de los niños, no podía equipararse con la del varón proveedor, sobre quien recaía la responsabilidad de sostener el hogar (Lobato, 2000, p. 107).

Como vimos, el descanso dominical fue sancionado con marcadas restricciones en 1907. Frente a los reiterados incumplimientos este derecho volvió a reglamentarse en 1918, explicitándose que la prohibición del trabajo

²¹ Departamento del Trabajo, Leyes y Decretos, mayo de 1919, Tucumán. Cita extraída de Landaburu, 2013, p. 116.

²² Para tal fin, al momento de su contratación en una fábrica o taller, los niños debían presentar una libreta de trabajo donde figure el permiso del defensor de menores, una constancia médica de aptitud física en función de la labor a desempeñar y la certificación escolar extendida por el Consejo de Educación donde se expresara que el niño había cumplido con las obligaciones escolares o que podía trabajar sin perjuicio de continuar con las mismas. Asimismo, el decreto prohibía la contratación de menores de 12 años en establecimientos industriales y mantenía la disposición que habilitaba a las mujeres embarazadas a gozar de una licencia de 30 días con posterioridad al alumbramiento, aunque durante ese periodo “solo se les reservaba el puesto”, es decir, la licencia no implicaba retribución salarial alguna. (Landaburu, 2013, pp. 129-130).

por cuenta ajena los días domingo no implicaba la disminución proporcional del salario convenido. Sin embargo, una vez más se excluyó del descanso dominical a los peones azucareros ocupados en las tareas agrícolas, a quienes se debía otorgar un día de descanso a la semana pero sin obligación del pago del jornal.

Como lo estudió Alejandra Landaburu, además de estas primeras concreciones en materia de legislación laboral, durante los años veinte se impulsaron diversos proyectos que no llegaron a convertirse en ley, algunos ni llegaron a discutirse, pero expresaron las preocupaciones sociales de los legisladores radicales y socialistas, las resistencias de los industriales a la intervención estatal y las dificultades del gobierno provincial para avanzar en el campo laboral.

Por ejemplo, en 1919, los diputados radicales Octaviano Navarro y Alberto Aybar Augier presentaron un proyecto que establecía que en los ingenios azucareros, fábricas, usinas, talleres de construcción y casas de comercio, entre otros, la jornada laboral no podía exceder las 8 horas. Sin embargo, habría que esperar hasta 1923 para que esa jornada alcance a los obreros de fábrica de la agroindustria. Ese mismo año de 1919 una segunda iniciativa impulsada por el radicalismo establecía que el pago de salarios debía realizarse cada quince días, en moneda de curso legal, en día hábil y durante las horas de trabajo. A 15 años de la huelga de 1904, este proyecto evidenciaba que el vale y la proveeduría todavía eran prácticas usuales en muchos ingenios.

El tercer proyecto que tampoco logró convertirse en ley fue presentado por Navarro en 1920 y se vinculaba con la creación de villas obreras. La iniciativa proponía la expropiación de terrenos, a cargo del Poder Ejecutivo, en zonas cercanas a los ingenios. Los lotes serían asignados a los trabajadores, quienes dispondrían de cinco años para pagar (de forma mensual y sin intereses) la propiedad. De esta forma, se pretendía empezar a resolver el apremiante problema de la vivienda obrera, en tanto el usufructo del techo otorgado por la patronal era indisociable de la existencia del vínculo contractual con el ingenio. El despido o el fin de ciclo laboral implicaban la pérdida de la vivienda y la exclusión del pueblo, lo que significaba la desarticulación de los vínculos de reciprocidad y solidaridad obreros y la pérdida de los beneficios

otorgados por la patronal (asistencia médica, escuela para sus hijos, entre otros).

En lo que respecta al tema de la salud obrera, en 1919 el diputado Raúl Colombres presentó un proyecto de ley que estipulaba que los ingenios debían contar con enfermería y personal auxiliar competente para garantizar la asistencia médica a los trabajadores azucareros. Ese año el proyecto no fue tratado pero la preocupación por la salud volvió a expresarse en octubre de 1920, cuando el diputado Horacio Montenegro expuso una iniciativa que obligaba a los dueños de los ingenios a construir un hospital para sus obreros. Finalmente, en 1925 se promulgó la ley que, emanada de un proyecto del diputado socialista Manuel Vera Hernández, establecía la asistencia médica obligatoria en los ingenios. Sin embargo, la ley estuvo signada por el incumplimiento sistemático de los industriales.

En materia laboral, la segunda gestión de gobierno radical, encabezada por Octaviano Vera se propuso reorganizar el Departamento de Trabajo, fortalecer la presencia del Estado en los conflictos entre el capital y el trabajo y procurar atender aspectos sensibles de las labores azucareras. En lo que respecta a este último tema, en 1922 Vera presentó un proyecto de creación de cooperativas de consumo para obreros con el propósito de reemplazar las proveedurías de los ingenios, denunciadas por los abusos que mermaban el deprimido salario obrero. El Departamento de Trabajo sería el encargado de la creación y administración de las cooperativas de consumo, donde las mercaderías no sufrirían los recargos propios de las proveedurías. Otro de los proyectos de Vera fue la formación de una Caja de Crédito y Ahorro Obrero destinada a atender las necesidades de los trabajadores durante el periodo de interzafra, en que el desempleo asolaba a la familia obrera.

Asediado por la crisis financiera de la provincia, jaqueado por la intransigencia de los industriales y la falta de quórum propio en la Cámara de Diputados, el gobernador no logró que estos proyectos se materializaran. Sin embargo, Vera logró avanzar con dos importantes leyes: la de salario mínimo que aseguraba a los obreros de fábrica y talleres mayores de 18 años un salario de 4,20 pesos y, en segundo lugar, la jornada laboral de 8 horas (Landaburu, 2013, pp.129-133)

Durante el gobierno del radical Miguel Campero (1924-1928) la promoción de leyes obreras fue sumamente débil pero, como contrapunto, se observó un mayor involucramiento del DPT en el cumplimiento de la legislación y un rol más activo en el relevamiento estadístico de las condiciones de trabajo. En este contexto, merecen destacarse dos leyes votadas a lo largo de su mandato, una de ellas, en 1925, prohibía el trabajo nocturno en las panaderías, precisaba las condiciones de salubridad que debían primar en estos espacios y estipulaba la prohibición de contratar a menores de 18 años.

Ese mismo año, por iniciativa del socialismo, se votó la ley de asistencia médica permanente, gratuita y obligatoria en los ingenios y establecimientos industriales que emplearan más de 200 trabajadores. Se estipulaba que estos ámbitos laborales debían disponer de una enfermería y una sala de primeros auxilios, a cargo de un médico con residencia permanente en el establecimiento, quien debía brindar atención médica a los empleados y obreros, tanto permanentes como temporarios, y a sus familias. Los industriales azucareros rechazaron la ley y presentaron una propuesta alternativa que consistía en que un grupo de ingenios, cercanos geográficamente, derivarían sus enfermos a determinados hospitales públicos y como contrapartida los industriales se comprometían a colaborar económicamente con su sostenimiento. La promulgación de la ley y la resistencia industrial remiten a un problema central: ¿quién era el responsable de la salud de los trabajadores? ¿qué obligaciones tenían los empresarios y cuál el Estado provincial en esta materia? La ley pretendía delegar en el sector privado esa responsabilidad pero éstos procuraron desligarse de la obligación y subrayaron que la salud obrera era un problema que incumbía al Estado y al diseño de políticas públicas. El incumplimiento de la norma fue sistemático.

En términos institucionales, a lo largo de la década de 1920, la debilidad original del DPT, es decir, su creación por decreto del poder ejecutivo provincial afectó su legitimidad frente a la patronal, que se encargaba de subrayar la falta de competencia resolutive en los conflictos laborales y circunscribía su papel al de mediador amistoso. El socialismo también cuestionó al Departamento, su crítica se dirigió a la falta de accionar frente al incumplimiento de la legislación laboral, principalmente la violación del pago de los salarios en moneda nacional

cuyos infractores eran los industriales azucareros (Landaburu, 2013, pp. 199-216).

El último gobierno radical de la década del veinte fue encabezado por José Sortheix (1928-1930). Su gestión no pudo superar el común denominador de las administraciones radicales, es decir, la imposibilidad de convertir en leyes los proyectos presentados por sus diputados y por el socialismo. Podemos decir que la debilidad de la legislación laboral fue una de las constantes del periodo, en tanto, la mayoría de los proyectos no llegaron a discutirse en las Cámara de Diputados y de Senadores. Sin embargo, repasar los proyectos de ley presentados revela los principales problemas del mundo del trabajo provincial, ayuda a conocer la persistencia de muchos de ellos –en tanto la reiteración de proyectos y reglamentaciones supone la existencia de recurrentes incumplimientos– y, por otro lado, permite ponderar la constante resistencia de la patronal, sobre todo de los industriales azucareros.

El problema de la vivienda obrera en la agroindustria volvió a irrumpir, luego del fracasado proyecto de villas obreras presentado en 1920. Ocho años más tarde, el diputado radical Julio Soria impulsó una iniciativa de similares características que facultaba al poder ejecutivo a expropiar terrenos circundantes a los ingenios, primer paso para la construcción de casas baratas que serían financiadas por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia.

La propuesta de Soria también recuperó el sensible problema de las proveedurías de los pueblos azucareros al prohibir que los propietarios de los ingenios obliguen a sus obreros y empleados a abastecerse en almacenes de la propia empresa. En tal sentido, en 1928 la reedición de esta preocupación reveló la persistencia de prácticas que mermaban el salario obrero, expresó la histórica resistencia de muchos industriales a poner fin a las proveedurías y manifestó la sensibilidad de una clase dirigente que alentaba la intervención del Estado como única alternativa para poner fin a las proveedurías.

Al año siguiente, la reiteración de proyectos reafirmó los históricos incumplimientos de la patronal. En efecto, en 1929 la Legislatura trató el tema de la colocación de asientos para los empleados y obreros de empresas particulares. El propósito era que los trabajadores cuyas tareas fueran discontinuas pudieran sentarse en los lapsos en que no laboraban pero la ley finalmente no fue sancionada. Esta propuesta recuperó el espíritu del decreto

del derecho de silla, promulgado en 1921. Su reiteración evidenciaba su incumplimiento y el deseo de muchos diputados por avanzar en la concreción de una ley tendiente a revertir la situación. Ese mismo año, el socialista Vera Hernández presentó un proyecto destinado a prohibir el trabajo nocturno en los comercios, es decir, entre las 20 y las 6:30 horas, lo que también indica la inobservancia de la normativa.

En síntesis, como señala Landaburu, un denominador común de los gobiernos radicales fue la dificultad de convertir en leyes los proyectos vinculados a la esfera laboral. De esta forma, la construcción de derechos fue un complejo proceso que tuvo que vencer históricas resistencias de los industriales, quienes defendieron la concepción privada de los vínculos laborales y concibieron los beneficios otorgados a los trabajadores como un asunto discrecional alejado de cualquier intento de convertirlos en obligaciones (Landaburu, 2013, p. 231).

6. Conclusiones

En el Tucumán de principios del siglo XX, la clase trabajadora se convirtió en un actor social que ganó en presencia y visibilidad pública. La lucha por mejorar sus condiciones laborales llevó a los trabajadores a organizarse en sociedades de resistencia, declarar huelgas, tomar las calles, participar en movilizaciones y elevar petitorios a las autoridades. Sus formas de organización, la manifestación de su descontento y la lucha por alcanzar sus reivindicaciones fueron clave en su constitución como clase, es decir, como actores colectivos con experiencias, intereses y demandas propias. La irrupción de estos actores y las crecientes protestas alertaron a los gobernantes, quienes de forma paulatina articularon políticas sociales con el propósito de atenuar la conflictividad social.

Sin embargo, el avance de la legislación laboral y la intervención del Estado a través del Departamento Provincial de Trabajo tuvieron que vencer múltiples resistencias, particularmente de los industriales azucareros. De esta forma, la conquista de derechos laborales fue un complejo proceso signado por las demandas y protestas de los trabajadores; la actitud renuente de los empresarios; los incumplimientos de la patronal frente a la legislación y la elaboración de múltiples proyectos laborales –especialmente de socialistas y

radicales— muchos de los cuales no llegaron a convertirse en ley pero otorgaron relevancia a los problemas de la clase trabajadora y algunos, con el tiempo, fueron recuperados.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

7. Bibliografía

Bravo, María Celia: "Introducción al estudio de la estructura ocupacional tucumana", en *Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos*, nº6, Instituto de Estudios Geográficos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 1989, pp. 77-103.

Bravo, María Celia: "Liberales, socialistas, Iglesia y patrones frente a la situación de los trabajadores en Tucumán", en Suriano, Juan (comp.): *La cuestión social en Argentina, 1870-1943*, Buenos Aires, La Colmena, 2004, pp. 31-61.

Bravo, María Celia: *Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán, 1895-1930*, Rosario, Prohistoria, 2008.

Bravo, María Celia y Vanesa Teitelbaum: "Socialistas y católicos disputando el mundo de los trabajadores. Protesta, sociabilidad y política en Tucumán (1895-1910)", en *Entrepasados*, año XVIII, nº 35, 2009, pp. 67-87.

Campi, Daniel y María Celia Bravo: "La mujer en Tucumán a fines del siglo XIX. Población, trabajo y coacción" en Teruel, Ana (comp.): *Población y trabajo en el noroeste argentino, siglos XVIII y XIX*, Jujuy, UNIHR – Universidad Nacional de Jujuy, 1995, pp.143-170.

Campi, Daniel: "Economía y sociedad en las provincias del Norte" en Lobato, Mirta (dir.) *Nueva Historia Argentina. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)*, t. V, Buenos Aires, Sudamericana, 2000, pp. 71- 118

Campi, Daniel: "Contrastes cotidianos. Los ingenios del norte argentino como complejos socioculturales, 1870-1930", en *Varia Historia*, vol. 25, nº41, 2009, pp. 245-267.

Correa Deza, Florencia y Daniel Campi: "La evolución del salario real del peón azucarero tucumano, 1881-1927", ponencia publicada en Actas del VIII Congresso Brasileiro de HistóriaEconômica e 9ª Conferência Internacional de História de Empresas, 6, 7 y 8 de septiembre de 2009, Campinas, São Paulo, Brasil.

Falcón, Ricardo: "Biografías de militantes sindicales", en Lobato Mirta (ed.): *CD Biografía de militantes sindicales de Ricardo Falcón más otros ensayos*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía yLetras, Universidad de Buenos Aires, 2014, pp. 204-205.

Illades, Carlos: *Conflicto, dominación y violencia. Capítulos de historia social*, México, Gedisa y Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, 2015.

Landaburu, Alejandra: "El proyecto católico para los trabajadores, una repuesta al problema social. Tucumán", en *V Congreso Nacional de Estudios del*

Trabajo, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, agosto de 2001.

Landaburu, Alejandra: *Niñez, juventud y educación. El proyecto salesiano en Tucumán, 1916-1931*, Tucumán, EDUNT, 2012.

Landaburu, Alejandra: *Los empresarios azucareros y la cuestión social. Tucumán, 1904-1930*, Tesis de doctorado, Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2013.

Landaburu, Alejandra y María Lenis: “Asociacionismo, empresarios azucareros y cuestión social en Tucumán: las huelgas azucareras, 1919-1923”, en Juan Manuel Cerdá, Gloria Guadarrama, María Dolores Lorenzo, Beatriz Moreyra (coords.) *El auxilio en las ciudades. Instituciones, actores y modelos de protección social. Argentina y México. Siglos XIX y XX*, México, El Colegio Mexiquense, A.C. y Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, 2015, pp. 429-456.

Lichtmajer, Leandro, Florencia Gutiérrez y Lucía Santos Lepera: “La comunidad laboral del ingenio Bella Vista. La resignificación de la experiencia obrera en los inicios del peronismo”, en *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, vol. XXI, vol. 21, pp. 213-236.

Lobato, Mirta: “Lenguaje laboral y género. Primera mitad del siglo XX”, en Gil Lozano, Fernanda; Valeria Pita y María Gabriela Ini (dir.): *Historia de las mujeres en la Argentina, siglo XX*, Buenos Aires, Taurus, 2000.

Lobato, Mirta: *Historia de las trabajadoras en la Argentina, (1869-1960)*, Buenos Aires, Edhasa, 2007.

Lobato, Mirta: *La prensa obrera. Buenos Aires y Montevideo, 1890-1958*, Buenos Aires, Edhasa, 2009.

Moyano, Daniel: “Industria azucarera y actividad metalúrgica en Tucumán (1870-1940)”, en *Revista de Historia Industrial*, nº 53, año XXI, 2013, pp.79-108.

Ostengo de Ahumada, Ana María: *La Legislación laboral en Tucumán. Recopilación ordenada de leyes, decretos y resoluciones sobre el derecho del trabajo y seguridad social, 1939-1969*, t. 1, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1969.

Palermo, Silvana: “La racionalización del trabajo en la Argentina de principios del siglo XX: el caso de los ferrocarriles del Estado”, en *H-Industri@*, año 9, nº 16, 2015, pp. 67-78.

Ramacciotti, Karina: “*De la culpa al seguro. La Ley de Accidentes de Trabajo, Argentina (1915-1955)*”, en *Revista Mundos do Trabalho*, vol. 3, nº 5, Río de Janeiro, junio de 2011, pp. 266-284.

Suriano, Juan: *Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina, 1870-1952*, Buenos Aires, Prometeo, 2006.

Teitelbaum, Vanesa: "Los centros obreros como ámbitos de cultura, protesta y política (Tucumán, 1895-1910)", en A.A.V.V: *La clase obrera y el Centenario, 1910: trabajos de investigación*, Buenos Aires, CTA, 2011 (a), pp. 71-112.

Teitelbaum, Vanesa: "El mutualismo en el mundo del trabajo (Tucumán, Argentina, 1877-1914)", en *Varia Historia*, vol. 27, nº 46, 2011 (b), pp. 665-688.

Teitelbaum, Vanesa: "Contra la 'tiranía del mostrador' en Tucumán del entresiglo"; en *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 68, nº 1, 2011 (c), pp. 223-252.

Teitelbaum, Vanesa: "Las protestas de los gremios y centros obreros por mejores condiciones de vida y de trabajo en Tucumán, Argentina, 1897-1915", en *Revista de Estudios Latinoamericanos*, vol. VIII, 2014, pp. 181-209.

Teitelbaum, Vanesa: "Veladas literario-musicales y manifestaciones públicas en la construcción del Primero de Mayo en Tucumán (Argentina), 1897-1925", en *Revista Esboços*, Florianópolis, v. 22, nº 33, 2015, pp.170-197.

Teitelbaum, Vanesa: "El anarquismo en Tucumán: expresiones de protesta y rituales obreros, 1900-1912", en *Revista Izquierdas*, 2016, nº 28, pp.66-93

8. Fuentes

Archivo del Centro Cultural Alberto Rougés (Tucumán), Correspondencia de Manuel García Fernández, 1919.

Archivo de la Legislatura de Tucumán, Departamento Provincial de Trabajo, *Memoria Anual*, 1925.

Bialet Massé, Juan: *Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas*, t. I y II, La Plata, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 2010.

Bravo, Mario: *Capítulos de legislación obrera*, Buenos Aires, Imprente A. García, 1927.

Congreso Nacional, Diario de Debates de la Cámara de Diputados, 14 septiembre de 1906, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Dirección de Información Parlamentaria, Dpto de Coordinación de Estudios.

Prensa:

El Orden (Tucumán)

Germinal (Tucumán)

La Gaceta (Tucumán)

La Vanguardia (Buenos Aires)